

## **Expertos abogan por el establecimiento de un acuerdo entre Gobiernos central y autonómicos, en forma de ley, para sacar al SNS de la “desvertebración” en la que se encuentra sumido**

Representantes de la Cámara alta, del Gobierno central y de las CC.AA. coinciden en señalar, en el transcurso de unas jornadas sobre el futuro de la Sanidad pública “la necesidad de devolver al SNS las herramientas precisas para garantizar a todos los españoles la universalidad y la equidad”

S.P., Madrid (18-5-07).-Expertos participantes en una jornada sobre “El futuro de la Sanidad pública”, organizada por la Secretaría de Políticas Sectoriales de UGT Madrid, han coincidido en subrayar el grave problema que supone para el Sistema Nacional de Salud la falta de coordinación reinante en estos momentos en el conjunto del sistema sanitario, al tiempo que han apuntado la responsabilidad que han de asumir tanto el Gobierno central como las Autonomías “por devolver al SNS las herramientas necesarias para garantizar dos de sus principios fundamentales como son la universalidad y la equidad”.

De lo contrario, como ha advertido, el senador y diputado por el Partido Socialista Madrileño, el reumatólogo Pedro Sabando, “puede ocurrir que se estén jugando una crisis sin precedentes, mientras se atienden a cuestiones que desde mi punto de vista muchas de ellas son secundarias” Por tanto, como recomendó durante su intervención en la mesa redonda “Coordinación sanitaria y calidad en el Sistema Nacional de Salud”, incluida dentro de las referidas jornadas, “tanto los profesionales sanitarios como los políticos necesitan en el momento actual levantar sus ojos y su pensamiento de la gestión y dirigirlos hacia otra parte”.

Sabando lamenta que se haya abierto un proceso, como es el de la descentralización, “sin un modelo final definido”. “Ni siquiera la Ley General de Sanidad conlleva un diseño acabado del sistema sanitario a partir de la descentralización completa, porque a ésta le falta el siguiente capítulo, que es su coordinación”, asegura como participante, en su día, en la elaboración de esta normativa básica sanitaria.

En línea con lo expresado por el ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el representante del Ministerio de Sanidad, en

este caso el doctor Alberto Infante, director general de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud, criticó que la descentralización producida en enero de 2002 en 10 CC.AA. "se llevara a cabo sin ningún marco regulador previo". "Al PP sólo se le ocurre establecer dicha regulación una vez hechas las transferencias, a través de la Ley de Cohesión", lo que ha supuesto, en su opinión, "un golpe duro para la historia contemporánea sanitaria, que ha condicionado algunos acontecimientos posteriores".

Para la presidenta de la Comisión de Salud del Parlamento de Cataluña, Carme Figueras, en el asunto de la coordinación, la decisión ha de ser "multilateral", "al constituir un problema y una misión de todos". El problema es averiguar la fórmula que consiga coordinar al Estado con las CC.AA. para garantizar a los ciudadanos la universalidad y la equidad, dado que "ello es una misión de todos".

Además, y a su juicio, "hay muchas contradicciones peligrosas que hay que arreglar, cuestionándose al respecto" "porqué en Sanidad, el Estado ha de poseer el control único de la financiación, cuando no sucede lo mismo en materia de educación, por ejemplo, cuando ambas son igual de importantes y de necesarias".

### **Acuerdo en forma de ley**

Para Sabando, cualquier fórmula de coordinación propuesta tiene que partir de la realidad de que hay 17 servicios de salud diferentes, sin ninguna dependencia jerárquica que no sea la de sus propias autoridades autonómicas, y sin incentivos externos específicos "probablemente ninguna autonomía se comprometa por sí misma al mantenimiento de la protección universal e igualatoria para los ciudadanos, mientras que sin estos principios el SNS se orienta lenta pero inexorablemente a su desaparición".

Por tanto, y a juicio de Sabando, se requiere un tipo de acuerdo, en forma de ley, compartido entre Gobierno central y CC.AA. "que ofrezca una salida racional a esta situación". Este político asume su dificultad, pero lo considera "una tarea central para quienes entienden que el SNS es un patrimonio de todos los españoles".